



Poder Judicial de la Nación

**CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I**

**Causa 13.881/21/RH1 –I– “FARMCITY SA c/ ESTADO NACIONAL SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR s/ RECURSO DE QUEJA CNDC”**

Buenos Aires, de marzo de 2022.

**Y VISTO:**

El recurso de queja interpuesto por Farmcity SA el 17.12.2021, contra la resolución de la Secretaría de Comercio n° 1081/2021 del 9.12.2021, mediante la cual se rechazó el recurso directo de apelación interpuesto; y

**CONSIDERANDO:**

1.- En primer término, debe recordarse que el 21.11.2017 la Secretaría de Comercio dictó la resolución 890/2017 mediante la cual la autoridad administrativa denegó la medida cautelar solicitada, que consistía en obtener una orden de cese de: a) la modificación unilateral e intempestiva de los descuentos que absorbe y soporta Farmcity SA en relación a medicamentos dispensados por ella a los beneficiarios del PAMI y el injustificado rechazo de los trámites de recupero y reintegro efectivizados a esos beneficiarios; b) el tratamiento diferencial discriminatorio a Farmcity con relación a los descuentos que absorbe respecto de los medicamentos dispensados por ella a los Beneficiarios de las Obras Sociales y Prepagas; c) la injustificada demora en la incorporación de nuevas farmacias “Farmacity” a la red de dispensación de Prepagas y Obras Sociales; d) la interrupción intempestiva e injustificada de la venta directa de productos medicinales a Farmcity por parte de los Laboratorios de Especialidades Medicinales, traducéndose en mayores costos de transacción por la incorporación de intermediarios y e) la modificación unilateral e intempestiva de los costos y de las



condiciones de financiación de los medicamentos provistos a Farmcity por parte de ciertas Droguerías.

Farmcity SA dedujo en su contra recurso directo de apelación (el 13.12.2017), que fue denegado mediante la resolución de la Secretaría de Comercio n° 1081/21 del 9.12.2021. La denegatoria se fundó en que no se trata de los supuestos de apelación que prevé el art. 52 de la ley 25.156 y que tampoco lo decidido le provoca un gravamen irreparable.

En tales condiciones Farmcity dedujo recurso de queja por apelación directa denegada ante este Tribunal. Fundó su posición en que la autoridad administrativa no tendría facultades para conceder o denegar el recurso directo y que lo decidido le causa un gravamen irreparable.

2.- En primer término, debe ponerse de relieve que los jueces no están obligados a tratar cada una de las argumentaciones que desarrollan las partes en sus agravios, sino sólo aquéllas que son conducentes para la solución del caso (Corte Suprema, Fallos: 262:222; 272:227; 278:271; 291:390; 308:584, entre otros; esta Sala, causas 638 del 26.12.89 y sus citas, 1071/94 del 5.7.94, 11.517/94 del 28.8.97, 4093 del 25.11.97, 17.543/96 del 5.3.98, entre otras).

3.- Así planteada la cuestión a resolver, cabe recordar que el recurso de queja es el remedio procesal tendiente a obtener que el Tribunal competente para conocer en instancia de revisión, tras controlar la decisión tomada por la autoridad de grado, en este caso la Secretaría de Comercio (preliminarmente en orden a si el recurso fue bien o mal denegado) revoque la providencia denegatoria de la apelación, la declare admisible y, eventualmente, disponga sustanciarla en la forma y efectos que correspondan.

En rigor, la queja exige —como condición básica de procedencia— la existencia de un agravio (Cámara Federal de San Martín, Secretaría Penal n° 2, causa n° 55 “Rius Roberto s/ recurso de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

queja”) que sea de imposible o tardía reparación (Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala II, causa “Cingolani Jorge s/ susp. Juicio a prueba”, del 20.4.05 y esta Sala, causa 4716/13 del 6.5.2014 y 9796/19 del 14.9.2021).

En otras palabras, la queja persigue corregir el error incurrido al denegar un recurso de apelación; o conceder excepcionalmente un recurso de apelación cuando la decisión recurrida pueda provocar un perjuicio grave e irreparable al apelante.

4.- Sentado todo ello, el Tribunal no advierte que la denegación del recurso directo de apelación aquí cuestionada pudiera ocasionar un agravio irreparable a la recurrente.

Ello así dado que la aquí recurrente no actualizó — pese al tiempo transcurrido— los perjuicios que trataba de evitar con la solicitud de una orden de cese de conducta presentada en sede administrativa el 8.9.2016. En efecto, la empresa Farmcity no explicó cuáles son los perjuicios o gravámenes actuales que sufre y que pretende subsanar con una medida de la naturaleza y entidad que pretende que se dicte —una vez que se revise la procedencia de la apelación—.

Por consiguiente, ponderando el tiempo transcurrido desde la solicitud de medida preventiva, su denegatoria y la interposición del recurso directo de apelación, el Tribunal advierte que el menoscabo que afirma experimentar la recurrente no sería de imposible o dificultosa reparación posterior.

5.- Pero principalmente, no escapa a la ponderación del Tribunal que la orden de cese solicitada en sede administrativa —sucintamente reseñada en el considerando 1º de este decisorio— coincide en lo sustancial con los complejos objetos procesales de fondo investigados por la autoridad administrativa.

Se sigue, en consecuencia, que de admitir — siquiera parcialmente— lo solicitado por Farmcity SA, se estaría





adelantando la decisión definitiva que, además —de ordinario—, debería dictar la autoridad administrativa en el momento procesal correspondiente. Todo lo hasta aquí expuesto impide que se configure un agravio irreparable como presupuesto de la concesión del recurso directo de apelación.

En otras palabras, bajo el argumento de obtener la protección cautelar de los jueces la parte pretende que se resuelva el fondo y decidan las cuestiones sustanciales definitivas planteadas y que aún se encuentran bajo investigación en el expediente administrativo, sustituyendo a la autoridad administrativa competente, desnaturalizando la actividad revisora de legalidad y constitucionalidad de los jueces y, en definitiva, anticipando la decisión administrativa cuando aún no concluyó la sustanciación del expediente que tramita ante la CNDC.

Se sigue, en consecuencia, que no se trata propiamente una medida preventiva de cese de conductas, de manera tal que la apelabilidad invocada a su favor por la recurrente (arts. 35 de la ley 25.156 y 66 inc. b) de la ley 27.442) no es la que surge de la ley de defensa de la competencia, dado que —por su naturaleza y alcance— se trata de un verdadero adelanto de la decisión definitiva.

6.- Es que, salvo en supuestos de comprobada violación al derecho de defensa generadores de gravamen irreversible, el turno de la revisión judicial llegará en caso de recaer sobre el imputado una sanción, incluso si las objeciones del impugnante se refieren al procedimiento sumarial previo a su imposición, que no sería el caso de autos desde que, en definitiva, la aquí recurrente pretende que se dicte una orden de cese de conducta que coincide en lo sustancial con la profunda y dificultosa investigación en curso que lleva adelante la autoridad administrativa, acto procesal que —por sí mismo— carecería de efectos jurídicos notoriamente agraviantes o que produzcan un evidente y definitivo menoscabo a los derechos de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

la parte (cfr. esta Sala, fundamentos de la causa n° 9796/19 del 14.9.2021).

7.- En ese sentido, no puede olvidarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido el ejercicio de facultades jurisdiccionales por órganos administrativos, pero ello siempre que su actuación esté condicionada a limitaciones constitucionales que surgen del art. 109 de la Constitución Nacional y a la garantía consagrada en el art. 18 de la Ley Fundamental, tales como la exigencia de dejar expedita una vía de control judicial verdaderamente suficiente (Fallos 247:646, 310:2159, 311:334 y 321:776), a fin de impedir que aquéllos ejerzan un poder absolutamente discrecional, sustraído a toda especie de revisión ulterior (Fallos 244:548 y 247:646; todo ello citado por esta Cámara, Sala III, causa 2929/02 del 15.8.02 y esta Sala, causa 210/17 del 15.8.17).

De lo contrario, como lo señaló el Alto Tribunal, el régimen dejaría de ser congruente con los derechos y garantías constitucionales (Fallos 207:346) y se privaría a las partes de la segunda instancia que es la propiamente judicial y que obvia, por ello, el carácter administrativo del tribunal de primera instancia (Fallos 199:401), en el entendimiento de que si bien el art. 18 de la Constitución Nacional no requiere multiplicidad de instancias, sí impone al menos una instancia judicial, siempre que estén en juego derechos que de ningún modo puedan ser totalmente sustraídos al conocimiento de los jueces ordinarios sin agravio constitucional (Fallos 247:646; todo ello citado por esta Cámara, Sala III, causa 2929/02 del 15.8.02 y esta Sala, causa 210/17 del 15.8.17).

Y para que el control judicial se pueda considerar verdaderamente suficiente, deberá ser más o menos extenso y profundo según las modalidades de cada situación jurídica, de acuerdo con el conjunto de factores y circunstancias variables o contingentes





como, por ejemplo, la naturaleza del derecho individual invocado, la magnitud de los intereses públicos comprometidos, la complejidad de la organización administrativa creada para garantizarlos y la mayor o menor descentralización del tribunal administrativo (Fallos 244:548), lo cual obliga a examinar en cada caso los aspectos específicos que singularizan la concreta materia litigiosa (Fallos 247:646; todo ello citado por esta Cámara, Sala III, causa 2929/02 del 15.8.02 y esta Sala, causa 210/17 del 15.8.17).

Cabe consignar, por lo tanto, que de ordinario la oportunidad del planteo de impugnaciones judiciales de fondo — como es en realidad lo aquí pretendido por Farmcity SA— será cuando concluya el procedimiento administrativo y se dicte la resolución correspondiente definitiva.

8.- Por último, la parte recurrente tampoco actualiza ni menciona cuál sería el peligro en la demora, como requisito de la medida preventiva solicitada y cuya denegatoria condujo a la interposición de esta queja por denegatoria del recurso directo. En efecto, Farmcity no explica entre sus argumentos cuál sería la urgencia perentoria en resolver sus planteos, desde que el tiempo transcurrido desde la petición inicial y su falta de actualización no demuestra que se le cause —al momento de resolver la presente queja— un perjuicio mensurable o concreto.

Por todo lo expuesto, y oído que fue el Fiscal General ante esta Cámara, el Tribunal **RESUELVE:** desestimar el recurso de queja interpuesto por Farmcity SA el 17.12.2021 contra la resolución de la Secretaría de Comercio n° 1081/21 del 9.12.2021, que denegó el recurso directo de apelación.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Florencia Nallar

Juan Perozziello Vizier

Firma válida  
Digitally signed by FLORENCIA  
NALLAR  
Date: 2022.03.31 12:15:36 ART

Firma válida **Fernando A. Uriarte**  
Digitally signed by JUAN  
PEROZZIELLO VIZIER  
Date: 2022.03.31 12:33:00 ART

Firma válida  
Digitally signed by FERNANDO  
ALCIDES URIARTE  
Date: 2022.03.31 12:51:51 ART



#36090814#320031347#20220331100952178